

Oficio No. 300-07-00-12-00-2022-2225

Asunto: Se solicita confirmación de clasificación de reserva.
Fracción: XXVIII del artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Periodo: Ejercicio 2021.

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 11 de agosto de 2022

**Comité de Transparencia del Servicio
de Administración Tributaria.**
Presente.

En términos de lo previsto en los artículos 65, fracción II, 68, 97, 98, fracción III, 99, 100, 102, 110, fracción I, 119, 120 y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lineamiento Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción III, Octavo, Noveno, Décimo Octavo, Vigésimo Tercero, Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, con relación a la obligación contenida en el artículo 70, fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual señala que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público "la información sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados..."

Al respecto, la Administración Central de Operación de Recursos y Servicios, a través de la Subadministración de Recursos y Servicios en Naucalpan, le informa que el dato correspondiente al número de elementos y el precio unitario, el cual de la operación aritmética da cuenta del número de elementos, contenidos en las documentales del procedimiento de contratación relacionado con el Servicio de Vigilancia en inmuebles en uso del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se encuentran clasificados como RESERVADO, por un periodo de 5 años, de conformidad con lo previsto en las fracciones I y V del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues inciden directamente en agravio de la seguridad pública, ya que dicha información, se encuentra estrechamente relacionada con la capacidad de reacción de la autoridad para ejercer sus atribuciones. Asimismo, dar a conocer esa información puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física, toda vez que vulneraría las condiciones de seguridad de los servidores públicos y/o el personal que ahí labora, de los contribuyentes a los que se prestan servicios, así como las instalaciones del SAT.

En ese sentido, el artículo 111 de la LFTAIP establece que las causales de reserva previstas en el artículo 110 se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la LFTAIP:

"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;
- II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
- III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio". (Sic)

PRUEBA DE DAÑO

Riesgo real, demostrable e identificable.

Bajo ese contexto, dicha información representa un riesgo real, demostrable e identificable, debido que el proporcionar dicha información daría a conocer la capacidad de reacción de este sujeto obligado, permitiendo que grupos delictivos planeen atentar contra la vida o la salud del personal de esta Institución, y/o en su caso intimidarlos, lo que podría incidir en que esta institución no cumpla con los objetivos y facultades correspondientes; siendo obligación del SAT la salvaguarda de la integridad de sus servidores públicos; así como la protección de las instalaciones y edificios.

En ese sentido, divulgar la información relativa al número de elementos que prestan el servicio de vigilancia en los inmuebles ocupados por este Sujeto Obligado, así como su precio unitario, resultaría útil a los grupos u organizaciones criminales, puesto que daría cuenta de la capacidad de reacción del cuerpo de seguridad SAT, quedando vulnerable a un posible ataque o acto de delincuencia, poniendo en riesgo la vida, seguridad y/o salud de los servidores públicos, del personal que ahí labora y de los propios contribuyentes que acuden a las instalaciones del SAT.

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 40, fracciones XXXIX y XL del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria (RISAT), en relación con el artículo 41, apartado G, le compete a la AGRS, a través de la ACORS, entre otras atribuciones, la de proponer y aplicar las disposiciones y procedimientos de seguridad para el ingreso, permanencia y salidas de personal, así como de los inmuebles que ocupa el SAT.

En razón de ello, en caso de proporcionar la información concerniente al número de elementos y su precio unitario, podría provocar una afectación a la salvaguarda de las instalaciones, edificios, así como de las personas que se encuentre dentro de los mismos.

Por lo antes expuesto, se puede concluir que la divulgación de la información representa un **riesgo real, demostrable e identificable** del perjuicio significativo al interés público, ya que, al dar a conocer el número de elementos que prestan el servicio de vigilancia en los inmuebles ocupados por el SAT, así como su precio unitario, contenido dentro de los contratos y anexos reportados, permitiría conocer las condiciones de seguridad y allegar de datos específicos a grupos delictivos, lo que deja vulnerable la capacidad de reacción para atender las actividades propias del SAT, por lo que el riesgo del perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.

De la lectura de los supuestos para la clasificación de la información como reservada, se aprecia que la finalidad de esas causales es lograr el eficaz resguardo y salvaguarda de las instalaciones, edificios, así como de los servidores públicos, del personal que labora ahí y de los contribuyentes que acuden a las instalaciones del SAT y con ello propiciar las condiciones de seguridad pública por las que vela la Institución.

Bajo ese tenor, la divulgación de dicha información, permitiría que grupos criminales o miembros de la delincuencia organizada puedan utilizar dicha información para anticipar y limitar la efectividad de la actuación del cuerpo de seguridad designado, toda vez que, permitiría conocer las condiciones de seguridad, lo que deja vulnerable la capacidad de reacción para atender las actividades propias del SAT.

En ese sentido, la presente prueba de daño presupone de manera justificada la reserva de la información concerniente al número de elementos que prestan el servicio de seguridad en el SAT, y su precio unitario, pone en riesgo, la vida, la seguridad y la salud de los servidores públicos y del personal que labora en el SAT, así como de los propios contribuyentes, ya que el riesgo de perjuicio que prevé la divulgación, supera el interés público de que se conozca.

En virtud de lo expuesto, es preciso que este sujeto obligado genere las condiciones necesarias para que prevalezca el interés público que se protege mediante dichas reservas, esto es, la seguridad pública, cuyos fines

son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

La limitación del derecho a conocer la información que se reserva es proporcional, ya que si bien es cierto que existe el derecho de acceso a la información, también lo es que dicho derecho debe tener una utilidad pública, y en el caso que nos ocupa, no se detecta que dicha información lo sea, ya que lejos de beneficiar a la colectividad, se estaría poniendo en riesgo la vida de los servidores públicos y usuarios que acuden a las instalaciones del SAT, alterando el orden público y la paz social.

Bajo una óptica amplia, los posibles efectos de la divulgación de la información claramente implican la alteración al orden público, debido a que, como ha quedado de manifiesto, dichos datos, permitirían que grupos criminales o miembros de la delincuencia organizada puedan utilizar dicha información para anticipar y limitar la efectividad de la actuación del cuerpo de seguridad designado, toda vez que, permitiría conocer las condiciones de seguridad, lo que deja vulnerable la capacidad de reacción para atender las actividades propias del SAT.

Finalmente, en atención a lo establecido por el artículo 100 de la LFTAIP, se determina que el plazo de reserva se ajusta de manera proporcional y adecuada para el interés público, restringiendo lo menos posible el ejercicio efectivo del derecho al acceso a la información.

Lo anterior, se hace de su conocimiento con el propósito de que ese Comité ratifique la reserva de la información antes referida.

Atentamente



Guillermina Cristina Quiroz Téllez

Subadministradora de Recursos y Servicios en Naucalpan